

	<b>JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI</b>
<b>Cali</b>	<b>Veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiuno (2021)</b>

**AUTO INTERLOCUTORIO NO. 307**

<b>MEDIO DE CONTROL</b>	<b>NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO</b>
<b>DEMANDANTE</b>	<b>HERNANDO DE JESÚS AGUIRRE</b>
<b>DEMANDADO</b>	<b>NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO</b>
<b>RADICADO</b>	<b>76001-33-33-009-2019-00118-00</b>

**I. ASUNTO:**

El Despacho procede a pronunciarse frente a la aprobación o no de la transacción celebrada entre las partes.

**II. ANTECEDENTES:**

El representante judicial en la defensa de los intereses de la **Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio** allegó contrato de transacción celebrado con el apoderado judicial de la demandante y, como consecuencia de ello, solicitó la terminación del proceso<sup>1</sup>.

Debido a lo anterior, por Auto de Sustanciación nro. 023 del 14 de abril de 2021<sup>2</sup>, el Juzgado requirió a las partes para que allegaran la documentación necesaria para estudiar de fondo el contrato de transacción celebrado entre esos extremos.

No obstante, las mencionadas partes guardaron silencio.

**III. CONSIDERACIONES:**

El contrato de transacción es de naturaleza civil, por lo que se encuentra regulado por esa normatividad. Es así que, el artículo 2469 del Código Civil lo definió como: «(...) *un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual*»; sin embargo, resaltó que «*No es transacción el acto que sólo consiste en la renuncia de un derecho que no se disputa*».

En la misma medida, la legislación civil precisó lo atinente a la capacidad de transigir e indicó que solo es posible su realización por parte de quien pueda disponer por el objeto de la transacción<sup>3</sup>; empero, cuando se realiza por intermedio de apoderado judicial, es necesario que este cuente con poder especial para ello<sup>4</sup>, so pena de que pierda su validez.

La precitada figura ha sido admitida dentro de la Jurisdicción de los Contencioso Administrativo; es así que el artículo 176 de la Ley 1437 de 2011 dispuso, que para terminar el proceso por transacción, las autoridades públicas requerirán autorización de quien los representa, lo cual concuerda con lo establecido en el artículo 313 del Código General del Proceso, el cual dispuso que «*los representantes de la nación, departamentos y*

<sup>1</sup> Ver anexo 2 del expediente digital.

<sup>2</sup> Ver anexo 3 del expediente digital.

<sup>3</sup> Artículo 2470 del Código Civil.

<sup>4</sup> Artículo 2471 del Código Civil.

**Radicación: 76001-33-33-009-2019-00118-00**

*municipios no podrán transigir sin autorización del Gobierno Nacional, del gobernador o alcalde, según fuere el caso».*

A su vez, resaltó que este produce efectos de cosa juzgada en última instancia<sup>5</sup> y solo será oponible entre los contratantes; no obstante, en aquellos eventos en los que existan varios interesados en el negocio jurídico, la transacción solo producirá efectos entre los contratantes y no perjudicará ni será aprovechada por aquellos que no la suscribieron<sup>6</sup>, al no ser oponible a terceros.

La Sección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado<sup>7</sup>, al referirse a la transacción, sostuvo:

De acuerdo con el contenido del artículo 24691 del Código Civil, la transacción es un contrato mediante el cual las partes dan por terminado extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual, por lo que es considerado como un mecanismo de solución directa de controversias, en el que las partes llegan a un arreglo amigable sobre un conflicto existente, ya sea de un conflicto que se encuentra en curso ante una autoridad judicial o que aún no ha sido sometido a su consideración.

Debido a la naturaleza autocompositiva de este medio de terminación de conflicto es evidente que dicho acuerdo consensual debe estar fundado en concesiones recíprocas de las partes inmersas en el conflicto, pues no puede considerarse que existe una transacción cuando simplemente una de las partes renuncia a sus derechos mientras la otra hace imponer los suyos, consideración que resulta apenas razonable si se tiene en cuenta que las obligaciones adquiridas en el contrato de transacción surgen de un acuerdo libre y voluntario entre las partes con el fin de dar por terminada una controversia de la mejor manera posible.

Así mismo, indicó que dicha figura está integrada por tres elementos, a saber:

- (i) la existencia de un derecho dudoso o de una relación jurídica incierta, aunque no esté en litigio;
- (ii) la voluntad o intención de las partes de mudar la relación jurídica dudosa por otra relación cierta y firme, y
- (iii) la eliminación convencional de la incertidumbre mediante concesiones recíprocas.

En la misma medida, la Corporación precisó, que los anteriores elementos deben estar acompañados del cumplimiento de las siguientes exigencias:

- (i) la observancia de los requisitos legales para la existencia y validez de los contratos;
- (ii) recaer sobre derechos de los cuales puedan disponer las partes, y
- (iii) tener capacidad, en el caso de los particulares, y competencia, en el evento de entidades públicas, para vincularse jurídicamente a través de un contrato de esa naturaleza.

En ese sentido, al ser la transacción un negocio jurídico, la jurisprudencia y la legislación ha previsto que esta debe cumplir, además de los elementos precitados, los requisitos previstos en el artículo 1502 del Código Civil, esto es, capacidad, consentimiento, objeto y causa lícita, exento de vicios.

Así las cosas y por remisión expresa del artículo 306 del CPACA, para que un contrato de transacción celebrado de manera extrajudicial tenga plena validez dentro del proceso ordinario, es necesario que se surta el trámite procesal por terminación anormal, establecido en el artículo 312 del Código General del Proceso, que señala:

<sup>5</sup> Artículo 2483 del Código Civil.

<sup>6</sup> Artículo 2484 del Código Civil.

<sup>7</sup> Consejero ponente: Ramiro De Jesús Pazos Guerrero. Bogotá D. C., veintiocho (28) de mayo de dos mil quince (2015). Radicación número: 05001-23-31-000-2000-04681-01(26137).

**Radicación: 76001-33-33-009-2019-00118-00**

**Artículo 312. Trámite.** En cualquier estado del proceso podrán las partes transigir la litis. También podrán transigir las diferencias que surjan con ocasión del cumplimiento de la sentencia.

Para que la transacción produzca efectos procesales deberá solicitarse por quienes la hayan celebrado, dirigida al juez o tribunal que conozca del proceso o de la respectiva actuación posterior a este, según fuere el caso, precisando sus alcances o acompañando el documento que la contenga. Dicha solicitud podrá presentarla también cualquiera de las partes, acompañando el documento de transacción; en este caso se dará traslado del escrito a las otras partes por tres (3) días.

El juez aceptará la transacción que se ajuste al derecho sustancial y declarará terminado el proceso, si se celebró por todas las partes y versa sobre la totalidad de las cuestiones debatidas o sobre las condenas impuestas en la sentencia. Si la transacción solo recae sobre parte del litigio o de la actuación posterior a la sentencia, el proceso o la actuación posterior a este continuará respecto de las personas o los aspectos no comprendidos en aquella, lo cual deberá precisar el juez en el auto que admita la transacción. El auto que resuelva sobre la transacción parcial es apelable en el efecto diferido, y el que resuelva sobre la transacción total lo será en el efecto suspensivo.

Cuando el proceso termine por transacción o esta sea parcial, no habrá lugar a costas, salvo que las partes convengan otra cosa.

Si la transacción requiere licencia y aprobación judicial, el mismo juez que conoce del proceso resolverá sobre estas; si para ello se requieren pruebas que no obren en el expediente, el juez las decretará de oficio o a solicitud de parte y para practicarlas señalará fecha y hora para audiencia.

En virtud de lo expuesto, se puede concluir que, en materia de lo contencioso administrativo, es procedente la terminación anormal del proceso por la figura jurídica de la transacción, siempre y cuando se cumplan con los requisitos formales y sustanciales previstos por el legislador y la jurisprudencia y, siempre y cuando tal acuerdo no implique la renuncia de los derechos de una de las partes y la imposición de los derechos de su contraparte, como quiera que las obligaciones contraídas en el contrato de transacción, surgen de un acuerdo libre y voluntario de las partes, con el fin de dar por terminada una controversia.

#### **IV. CASO EN CONCRETO**

El Juzgado procede a estudiar si el contrato de transacción aportado al plenario por el extremo pasivo cumple con los requisitos de orden formal y sustancial, para que sea procedente la aprobación por parte de este Juzgado y dar por terminado el presente asunto.

Previo a lo anterior, es pertinente precisar que, de conformidad con el inciso segundo del artículo 312 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011, sería del caso correr traslado de esa solicitud a las demás partes; sin embargo, como quiera que el citado contrato fue suscrito por quienes conforman ambos extremos, el Juzgado se abstendrá de ello, en aplicación al principio celeridad y económica procesal, y pasará a pronunciarse de fondo frente a la solicitud.

En tal sentido, conforme se precisó en párrafos anteriores, entre los requisitos dispuestos por la norma para la aprobación del contrato de transacción, está el de probar la capacidad y competencia de las partes para esa actuación; sin embargo, tal circunstancia no fue acreditada en el plenario, conforme se pasa a exponer:

Por un lado, se encuentra acreditado que el contrato de transacción fue suscrito por el abogado **Iván Camilo Arboleda Marín**, quien actúa como apoderado judicial del extremo activo y cuenta con la facultad expresa de transigir la presente Litis.

Así mismo, se advierte que el mencionado contrato se encuentra suscrito por la **Nación** –

**Radicación: 76001-33-33-009-2019-00118-00**

**Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio**, a través del doctor **Luis Gustavo Fierro Maya**, en calidad de delegado de la **Ministra de Educación Nacional**, en virtud de lo dispuesto en la Resolución nro. 13878 del 28 de julio de 2020. No obstante, tal calidad no fue acreditada al plenario, pues no se aportó copia de ese acto administrativo.

Tampoco, fue aportada la siguiente documentación: i) autorización expresa de la **Nación - Ministerio de Educación** al doctor **Fierro Maya** para celebrar el contrato de transacción; ii) certificación suscrita por el Secretario Técnico del Comité, en el que consta la recomendación dada por el Comité de Conciliación del **Ministerio de Educación**, en sesión ordinaria número treinta (30) del 13 de agosto de 2020 y iii) copia del comunicado con radicado 2020-ER-296569 del 18 de noviembre de 2020, en el que la **Fiduprevisora S.A.** remitió la relación de los procesos judiciales verificados y certificados, que cumplían las condiciones para conciliar y transigir.

Finalmente, si bien la sanción moratoria ha sido contemplada como aquellos derechos inciertos y discutibles que pueden ser transigidos por las partes, lo cierto es que era necesario que el Despacho determinara si lo transado no resultaba lesivo para los intereses patrimoniales del Estado; sin embargo, no fue aportada la liquidación que sirvió de sustento para calcular la sanción mora a favor del señor **Hernando De Jesús Aguirre**.

Evidenciado lo precedente, deberá entonces improbarse la transacción celebrada entre la parte demandante y la **Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio**, al no haberse acreditado los requisitos de capacidad y disponibilidad de lo transado, motivo por el que, una vez ejecutoriada la presente providencia, se dispondrá que se continúe con el trámite procesal siguiente.

Finalmente, se reconocerá personería al abogado **Yeison Leonardo Garzón Gómez** y **Julián Ernesto Lugo Rosero**, quien allegó sustitución de poder conferido por el apoderado judicial de la **Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio**, el cual está presentado en legal y debida forma.

Por lo expuesto, el **JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI**, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

#### **RESUELVE:**

**PRIMERO: IMPROBAR LA TRANSACCIÓN** celebrada entre la parte demandante y la **Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio**, por las razones expuestas.

**SEGUNDO: RECONOCER** personería al abogado **Yeison Leonardo Garzón Gómez**, identificado con cédula de ciudadanía nro. 80.912.758 y portador de la tarjeta profesional nro. 218.185 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar en el proceso como apoderado judicial sustituto de la parte de la **Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio**, en los términos del poder conferido, de conformidad con los artículos 74 y s.s. del Código de General del Proceso.

**TERCERO:** En firme el presente proveído, continúese con el trámite procesal siguiente.

#### **NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dmam

**Firmado Por:**

**Radicación: 76001-33-33-009-2019-00118-00**

**MIRFELLY ROCIO VELANDIA BERMEO  
JUEZ CIRCUITO  
JUZGADO 009 ADMINISTRATIVO ORAL DE CALI**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,  
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

**b4c2e2564197034477d622b5e78f3c6db3a9768ecbf5e7bad8fbb316ce913b99**

Documento generado en 28/05/2021 09:33:52 AM

**Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:  
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**